



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Exp.: A/SUM-002194/2022

MUNICIPIO: Alcorcón

ACTUACIÓN: Creación de nuevas áreas de juego y deportivas

PROGRAMA: Programa de Inversión Regional de la Comunidad de Madrid para el periodo 2016-2019 (PRORROGADO)

ASUNTO: Tramitación ordinaria. Procedimiento abierto. Pluralidad de criterios.

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 974.206,61 euros (IVA incluido)

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: 805.129,43 euros

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LOS EXTREMOS EXIGIDOS EN EL ARTÍCULO 116.4 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO (LCSP), DEL CONTRATO DE CREACIÓN DE NUEVAS ÁREAS DE JUEGO Y DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE ALCORCÓN

Mediante la presente memoria se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, que establece que:

“4. En el expediente se justificará adecuadamente:

- a) La elección del procedimiento de licitación.*
- b) La clasificación que se exija a los participantes.*
- c) Los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo.*
- d) El valor estimado del contrato con una indicación de todos los conceptos que lo integran, incluyendo siempre los costes laborales si existiesen.*
- e) La necesidad de la Administración a la que se pretende dar satisfacción mediante la contratación de las prestaciones correspondientes; y su relación con el objeto del contrato, que deberá ser directa, clara y proporcional.*
- f) En los contratos de servicios, el informe de insuficiencia de medios.*
- g) La decisión de no dividir en lotes el objeto del contrato, en su caso”.*

1. PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN Y CRITERIO DE ADJUDICACIÓN

Basándonos en el valor estimado para esta contratación, y siguiendo en todo caso, para su cálculo lo estipulado en el art. 101 de la LCSP 9/2017, se considera más adecuado elegir el procedimiento abierto con pluralidad de criterios.

Conforme al supuesto establecido en el art. 131 de la LCSP 9/2017, utilizaremos la pluralidad de criterios de adjudicación, basados en el principio de mejor relación calidad-precio, al objeto de promover la libre concurrencia y publicidad en el ámbito de la

contratación pública, pudiendo por lo tanto cualquier interesado presentar una proposición y quedando excluida toda la negociación con los licitadores de los términos del contrato, art. 156 de la LCSP 9/2017.

De otro lado, en consonancia con lo establecido en los artículos 145 y 146.2 de la LCSP, los criterios elegidos para la adjudicación, que permiten una mejora en las condiciones para la Administración, son los siguientes:

1. Criterio relacionado con los costes: el precio. Ponderación: 70%.

La fórmula elegida para valorar el precio ofertado pone en relación cada baja de licitación con las restantes, otorgándose 70 puntos a la mayor baja ofertada, y asignando la puntuación al resto de ofertas proporcionalmente, según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = \frac{70 \times \text{Oferta más baja}}{\text{Oferta a valorar}}$$

Se ha optado por esta fórmula, porque distribuye de manera directamente proporcional los 70 puntos en función de las ofertas presentadas, otorgando 70 puntos a la oferta más baja. De esta forma, la diferencia de puntuación entre las ofertas presenta menores diferencias cuantitativas que si la fórmula se expresara en función de las bajas (PBL – oferta), ya que en este caso las ofertas más cercanas al PBL, obtendrían puntuaciones cercanas a 0. Esta mayor diferencia cuantitativa otorgaría al criterio precio una incidencia mayor en el cómputo global en detrimento del resto de criterios. En consecuencia, la formulación en función de las ofertas que se ha elegido permite que las ofertas con mejor relación calidad/precio obtengan las mejores puntuaciones.

b) Criterio cualitativo evaluable mediante la aplicación de fórmulas: Ampliación del plazo en que los suministros estén cubiertos por la garantía definitiva: (máx. 30 puntos).

Por cada 4 meses de ampliación del plazo de garantía de los suministros, adicionales al plazo mínimo de 24 meses exigido, se otorgarán 10 puntos, hasta un máximo de 30 puntos.

Por 4 meses adicionales	10 puntos
Por 8 meses adicionales	20 puntos
Por 12 meses adicionales	30 puntos

Total criterios adjudicación: 100 puntos

De los criterios objetivos establecidos anteriormente, se tomará en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que la proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados, el señalado con el número 1 –precio-, ya que dicho criterio es el único que se considera relevante para

determinar la viabilidad de la oferta del licitador considerada en su conjunto. Para apreciar dicha circunstancia se estará a lo dispuesto en el art. 149 de la LCSP y en el art. 85 del Reglamento General de La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado 21 de octubre de 2019.

Por lo tanto, se considerarán desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

- Cuando concurra 1 solo licitador y su oferta sea inferior al presupuesto base de licitación en más del 25%.
- Cuando concurren 2 licitadores, la que sea inferior en más del 20% a la otra oferta.
- Cuando concurren 3 licitadores, las que sean inferiores en más del 10 % a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más del 10 % a dicha media.
- Cuando concurren 4 o más licitadores, las que sean inferiores en más del 10 % a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más del 10 %, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

En cuanto a la documentación técnica a presentar por los licitadores en relación con los criterios de adjudicación del contrato será el Anexo I: Modelo de Oferta del Pliego de Cláusulas Particulares, en el que se expresará el precio y la ampliación del plazo de garantía de los suministros, que se incluirán en el Sobre nº 2.

No se establecen parámetros para considerar la oferta anormalmente baja en relación con el criterio de ampliación del plazo de garantía de los suministros al no ser éste un factor determinante que pudiera comprometer la viabilidad de la oferta y de la ejecución del contrato. Asimismo, la asignación de puntos ya contiene un límite, al no asignarse puntos por ampliaciones a los 12 meses adicionales.

2. CRITERIOS DE SOLVENCIA Y ECONÓMICA Y FINANCIERA Y TÉCNICA O PROFESIONAL

Atendiendo a las características y al valor estimado del contrato, la solvencia económica y financiera y la solvencia técnica y profesional de los licitadores, deberá acreditarse conforme a lo previsto en los artículos 87 y 89 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público.

En la presente memoria se justifican los criterios de solvencia y su acreditación, quedando así fijada la solvencia con precisión, relacionada con el objeto e importe del contrato, sin que produzca efectos de carácter discriminatorio.

Los criterios utilizados son ponderados y proporcionales al importe del contrato, sin que se excluya a empresarios capacitados para la ejecución del mismo.

El empresario podrá acreditar su solvencia acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación y detallados en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato y que se justifican en la presente memoria.

A continuación, se exponen los criterios de solvencia que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato.

2.1 Solvencia económica y financiera

2.1.1 Acreditación de la solvencia económica y financiera

Artículo 87.1 de la LCSP, apartado a): “Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente. El volumen de negocios mínimo anual exigido no excederá de una vez y media el valor estimado del contrato, excepto en casos debidamente justificados como los relacionados con los riesgos especiales vinculados a la naturaleza de las obras, los servicios o los suministros.”

Criterio de selección:

Volumen de negocios anual de la empresa, referido al año del mayor volumen de negocio de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas, por importe igual o superior a 1.207.000,00 euros.

Siendo el valor estimado del contrato de 805.129,43 euros, el importe mínimo exigido no excede de una vez y media el valor estimado, que asciende a la cantidad de 1.207.694,14 euros.

Acreditación documental:

Por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso contrario, por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios individuales no inscritos en el Registro mercantil acreditarán su volumen anual de negocios mediante libros de inventarios y cuentas anuales legalizados en el Registro Mercantil.

2.1.2 Acreditación de la solvencia técnica y profesional

Los medios de acreditación de la solvencia técnica que se consideran más adecuados, dadas las características del contrato, son los previstos en el artículo 89.1 apartado a) y f) LCSP:

a) Art. 89.1 a) LCSP, criterio de selección y acreditación documental:

Relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de los suministros pertinentes efectuados más de tres años antes. Cuando le sea requerido por los servicios dependientes del órgano de contratación, los suministros efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso estos certificados serán comunicados al órgano de contratación por la autoridad competente.

Criterio de selección:

Se deberá acreditar haber realizado suministros de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto de este contrato, en el año de mayor ejecución de los últimos 3 años, por un importe anual acumulado igual o superior a 564.000,00 euros.

Para determinar que los suministros son de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato se atenderá a los cinco primeros dígitos de la CPV.

Acreditación documental:

Relación firmada por el representante legal de la empresa y certificados en los que se indique el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras donde se precise si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y si se llevaron normalmente a buen término.

Los servicios o trabajos incluidos en dicha relación se acreditarán:

- Mediante certificados de buena ejecución, expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público.
- Mediante un certificado expedido por el empresario o, a falta de este certificado, mediante una declaración responsable del empresario, cuando el destinatario sea un sujeto privado.

Los certificados de buena ejecución incluidos en la relación cuyo destinatario fuera una entidad del sector público, podrán ser comunicados directamente al órgano de

contratación por la entidad contratante de las obras. En este caso, el licitador habrá de informar por escrito de tal circunstancia al órgano de contratación, indicando la entidad contratante a la que ha solicitado la comunicación directa entre Administraciones Públicas y una dirección electrónica de contacto de dicha entidad.

b) Art. 89.1 f) LCSP, criterio de selección y acreditación documental:

Certificados expedidos por los institutos o servicios oficiales encargados del control de calidad, de competencia reconocida, que acrediten la conformidad de productos perfectamente detallada mediante referencias a determinadas especificaciones o normas técnicas.

Criterio de selección:

Certificado de Calidad de Producto emitido por un Organismo de Certificación Acreditado (por ENAC u otro organismo con el que ésta tenga suscrito un acuerdo multilateral de reconocimiento) con base en las normas UNE-EN 1176 “Equipamiento de las áreas de juego”.

Acreditación documental:

Declaración del representante legal de la empresa en la que se indique la validez del certificado y copia de éste.

3. CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

Para dar cumplimiento al artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público (LCSP), se establece como condición especial de ejecución de carácter social que el adjudicatario deberá emplear durante la ejecución del contrato, en los supuestos de nuevas contrataciones, bajas y sustituciones, a personas en situación legal de desempleo, según lo establecido en el artículo 267 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Esta obligación se hace extensible al personal contratado por las empresas subcontratistas que puedan participar en la ejecución.

A efectos de su comprobación, el contratista deberá presentar mensualmente, junto a la certificación, una relación del personal que ha participado en su ejecución, tanto por parte de la propia empresa adjudicataria como por las empresas subcontratistas, que incluya tipo de contrato y fecha de celebración.

Esta condición especial no supone un incremento del coste del contrato y tendrá la consideración de **esencial** y su incumplimiento constituirá causa de resolución del contrato a los efectos del artículo 211.1.f) de la LCSP.

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Se trata de un contrato mixto por contener prestaciones propias de dos contratos,

suministro y obra, y encontrarse ambas prestaciones directamente vinculadas entre sí manteniendo una relación de complementariedad que exige su consideración y tratamiento como una unidad funcional. El régimen jurídico y las normas que regirán la adjudicación serán las normas del contrato de suministros, por ser esta la prestación principal. En cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, se seguirán las normas aplicables a las diferentes prestaciones.

De conformidad con lo previsto en el artículo 233 d) de la LCSP, los proyectos de obra deberán comprender al menos “un presupuesto, integrado o no por varios parciales, con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, en su caso, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto se ordenará por obras elementales, en los términos que reglamentariamente se establezcan”.

El proyecto aprobado se ajusta a lo dispuesto en el citado artículo e incluye un presupuesto con expresión de los precios unitarios y de los descompuestos, estado de mediciones y los detalles precisos para su valoración. El presupuesto está ordenado por obras elementales e incluye los costes directos e indirectos.

Con arreglo a lo que establece el artículo 130 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP): “El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

1. Se considerarán costes directos:

- a) La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- c) Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
- d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

2. Se considerarán costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del

proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.”

Los precios unitarios contemplados en el proyecto de obra recogen los costes directos e indirectos y entre los costes directos, señaladamente, los de personal que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales.

El precio base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de **974.206,61 euros**, desglosado en **362.480,57 euros** correspondientes a la prestación de las obras y **611.726,04 euros** correspondientes a la prestación del suministro.

El presupuesto del proyecto detalla, asimismo, el presupuesto de ejecución material, definido en el artículo 131 del RGLCAP como el resultado obtenido de la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas, y asciende a la cantidad de **251.740,10 euros**. El importe de los precios unitarios contenido en el proyecto se encuentra en el entorno de los valores marcados en la Base de Precios de la Construcción Centro del Colegio de Aparejadores de Guadalajara, documento de referencia en la elaboración de proyectos en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el presupuesto base de licitación, conforme a lo establecido en el artículo 100 de la LCSP y 131 del RGLCAP, se obtiene incrementado el de ejecución material con los gastos generales de estructura que inciden en el contrato y que se cifran en un porcentaje entre el 13% y el 17% sobre el presupuesto de ejecución material, que en el caso de este contrato es de un 13%, por un importe de **32.726,21 euros**.

También deberemos sumar al presupuesto de ejecución material un porcentaje del 6% en concepto de beneficio industrial, en este caso, **15.104,41 euros**.

Obtenemos así un presupuesto para la obra de **299.570,72 euros**, al que hay que aplicar el tipo impositivo vigente, del impuesto sobre el valor añadido, conforme a la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicho tipo es del 21%, con un importe de IVA de **62.909,85 euros**.

Al importe relativo a la prestación de suministro, **505.558,71 euros**, se le aplica el tipo impositivo vigente del IVA (21%), que asciende a la cantidad de **106.167,33 euros**.

El resultado de estas operaciones aritméticas da el presupuesto base de licitación, que conforme dispone el artículo 100 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público es el límite máximo de gasto que, en virtud del contrato, puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido. El presupuesto base de licitación de este contrato asciende a la cantidad de **974.206,61 euros**.

Según lo expuesto, el presupuesto recogido en el proyecto de obra es el siguiente:

SUMINISTRO	
GIMNASIO EN LA CALLE	138.658,08 euros
JUEGOS INFANTILES	332.867,12 euros
GIMNASIO DE REHABILITACIÓN	34.033,51 euros
VALOR ESTIMADO	505.558,71 euros
IVA 21%	106.167,33 euros
TOTAL SUMINISTRO	611.726,04 euros
OBRA	
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	251.740,10 euros
13,00% Gastos generales	32.726,21 euros
6,00% Beneficio Industrial	15.104,41 euros
VALOR ESTIMADO	299.570,72 euros
21% de IVA	62.909,85 euros
TOTAL OBRA	362.480,57 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	974.206,61 euros

No se prevé expresamente la posibilidad de modificar el contrato, así como tampoco su prórroga, de ahí que el valor estimado del contrato, calculado de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la LCSP, es de **805.129,43 euros**.

De otro lado, atendiendo al plazo de ejecución de la obra previsto en el proyecto de ejecución, que es de 13 semanas, se prevé la ejecución de la misma en el ejercicio presupuestario de 2022.

Por último, el artículo 116.5 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público establece que: “si la financiación del contrato ha de realizarse con aportaciones de distinta procedencia, aunque se trate de órganos de una misma Administración pública, se tramitará un solo expediente por el órgano de contratación al que corresponda la adjudicación del contrato, debiendo acreditarse en aquel la plena disponibilidad de todas las aportaciones y determinarse el orden de su abono, con inclusión de una garantía para su efectividad.”

El porcentaje de cofinanciación que aporta el Ayuntamiento de Alcorcón es del 9,0909%, considerando que la población del municipio de Alcorcón en el año 2015 era de 167.136 personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del decreto 75/2016 por el que se aprueba el Programa de Inversión Regional 2016-2019), correspondiendo a la Comunidad de Madrid la financiación del 90,9091% restante.

El gasto se efectuará con cargo al Presupuesto General de la Comunidad de Madrid, imputándose a la aplicación presupuestaria G/942N/62900 y al proyecto de gasto 2018/001188.

6. JUSTIFICACIÓN DE LA NO DIVISIÓN EN LOTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 99.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se expone a continuación la justificación de la no división en lotes del objeto de este contrato.

El objeto de este contrato mixto de suministro y obra es el suministro, montaje e instalación de diversos elementos de juego infantiles, con edades de uso variable, y de aparatos inclusivos, de gimnasia y para la rehabilitación de personas con Alzheimer, Parkinson y Artrosis-Artritis. Igualmente contempla la realización de la obra civil necesaria para la preparación del terreno previa a la instalación de los aparatos.

Los trabajos se llevarán a cabo en distintas áreas de la ciudad de Alcorcón, 7 espacios para la instalación de los juegos infantiles, 11 áreas para los aparatos de gimnasia, y elementos para rehabilitación en 3 zonas.

Desde el punto de vista técnico, la división en lotes del contrato dificultaría la correcta ejecución del mismo, dada la necesaria coordinación de la ejecución de las distintas prestaciones que comprende. La correcta coordinación de estos trabajos se vería dificultada si las prestaciones se realizaran de manera independiente por una pluralidad de empresas.

Por otra parte, desde el punto de vista económico, la no división en lotes del contrato favorece en gran medida la posibilidad de que los licitadores presenten ofertas económicamente más ventajosas para la Administración, al poder repartir el total de los costes indirectos de la empresa (contratación de personal, etc.) en el conjunto de la actuación.

Por todo ello, para lograr un mayor ahorro a la Administración sin menoscabo de la calidad de la ejecución de la actuación, para este contrato no se prevé su división en lotes.

7. NECESIDAD DE SEGURO

En la propuesta de contratación y en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, se incluye la exigencia a la empresa que resulte adjudicataria de suscribir un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra los daños personales y materiales que puedan sufrir terceros, durante la ejecución de las obras.

Si bien, el adjudicatario debe constituir una garantía definitiva en favor de la Administración, ésta cubre, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley 9/2017 de contratos del sector público, los siguientes conceptos:

- a) De la obligación de formalizar el contrato en plazo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153.

- b) De las penalidades impuestas al contratista conforme al artículo 192 de la presente Ley.
- c) De la correcta ejecución de las prestaciones contempladas en el contrato incluidas las mejoras que ofertadas por el contratista hayan sido aceptadas por el órgano de contratación, de los gastos originados a la Administración por la demora del contratista en el cumplimiento de sus obligaciones, y de los daños y perjuicios ocasionados a la misma con motivo de la ejecución del contrato o por su incumplimiento, cuando no proceda su resolución.
- d) De la incautación que puede decretarse en los casos de resolución del contrato, de acuerdo con lo que en él o en esta Ley esté establecido.
- e) Además, en los contratos de obras, de servicios y de suministros, la garantía definitiva responderá de la inexistencia de vicios o defectos de los bienes contruidos o suministrados o de los servicios prestados durante el plazo de garantía que se haya previsto en el contrato.

Sin embargo, el objeto del contrato de seguro de responsabilidad civil, es otro, como se ha expuesto.

El centro gestor entiende que el aseguramiento de dicha responsabilidad coadyuva a la mejor satisfacción del interés de la Administración en la ejecución del contrato y en la protección de terceros que eventualmente puedan resultar perjudicados por la actuación del contratista en la realización de la obra. Por estas razones, se considera apropiado exigir al contratista que celebre un contrato de seguro de responsabilidad civil.

En Madrid, el día de la fecha
EL DIRECTOR GENERAL DE INVERSIONES Y
DESARROLLO LOCAL

F. mado d g almen e po MIRANDA DE LARRA ARNAIZ ALEJO JOAQUÍN
Fecha 2022 01 26 17 34